

Alimentar el mundo, cuidar el planeta



Foto: Oxfam

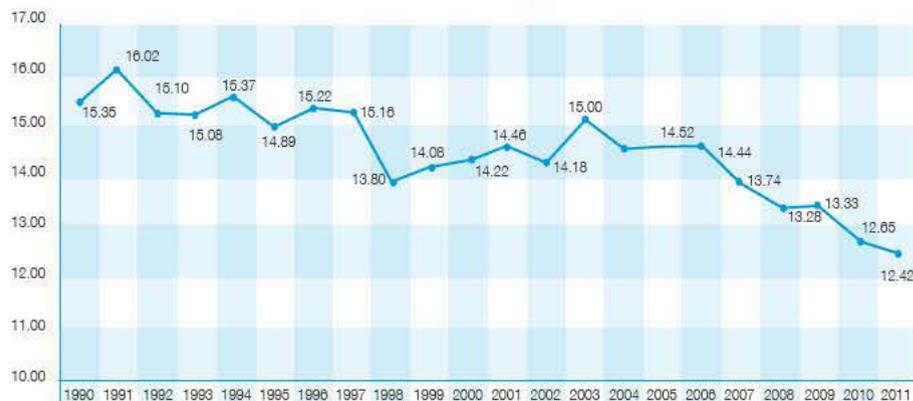
Inversión pública agropecuaria: desafíos y oportunidades

Rene Martínez Céspedes¹
Fundación JUBILEO

Al analizar el crecimiento de la economía en Bolivia durante la última década, se puede advertir que ésta tuvo una tendencia a aumentar, es decir que, en varias gestiones, el crecimiento del producto (PIB total) fue más alto que el año anterior. En el caso específico del sector agropecuario, éste ha seguido una evolución bastante variante los últimos años, sin embargo, estuvo por debajo del crecimiento del PIB total, con una tendencia a disminuir y llegando incluso en las gestiones 2007 y 2010 a cifras negativas, es decir hubo una caída de la actividad o producción de este sector, que, entre otros aspectos, se debe a las condiciones climáticas negativas.

Siendo que el crecimiento del sector agropecuario fue menor, la participación del mismo, en la composición del total de la producción (del PIB) disminuyó en los últimos años.

Porcentaje de participación del sector agropecuario en el PIB real, 1990 – 2011 (p)



FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Si bien se registra una disminución desde los 90, esta situación se agravó en los últimos años. El gráfico nos muestra que en 1990, el sector agropecuario representaba el 15,35% del total del producto, el 2000 fue de 14,22%, el

¹ Economista con Maestría en Proyectos. Actualmente especialista en Presupuestos Públicos de Fundación Jubileo.

2003 llegó nuevamente a 15% y de ahí en adelante disminuyó hasta el 12,42% en 2011. Cabe señalar que los sectores que tuvieron un crecimiento en su participación en la composición del PIB son principalmente los extractivos (hidrocarburos y minería).

Insuficiente inversión en el sector

Además de las condiciones climáticas, el desarrollo agropecuario, como cualquier otro sector, depende de la inversión que se realice. La inversión, tanto pública como privada, es determinante para el crecimiento de una economía.

Con relación a la inversión pública total (en todos los sectores), ésta aumentó significativamente en los últimos años, principalmente por la disponibilidad de mayores ingresos provenientes de hidrocarburos. Si bien la inversión pública en el sector agropecuario tuvo un crecimiento, éste ha sido comparativamente menor con relación al total.

La participación de la inversión en el sector agropecuario, con relación a la inversión pública total, disminuyó gradualmente de 9,2%, en los años 2001 y 2002, a 5,5% en 2010, con una leve recuperación en 2011 a 6,2%. Para la gestión 2012 se tiene presupuestado un porcentaje de 6,3. En todo caso, se observa que el porcentaje de inversión en éste sector, en relación a la inversión total, es menor que a principios de la década del 2000.

Con relación a la inversión privada, no se cuenta con información; sin embargo, no existe una Ley de Inversiones que otorgue las garantías para esta, por lo que posiblemente la situación tampoco sea muy alentadora.

En síntesis, en un escenario en el cual la producción del sector agropecuario está perdiendo su participación en la economía nacional cuando la necesidad de inversión es mayor considerando los efectos del cambio climático, no se percibe que

el sector público esté realizando los esfuerzos necesarios para impulsar esta área.

Los últimos años hubo mayor liquidez en la economía –principalmente por el dinero de sectores como los hidrocarburos- por tanto, la demanda de los diferentes bienes y servicios de la economía se incrementó, pero si ésta no es acompañada por una mayor oferta, existe el riesgo de inflación y/o escasez. El sector agropecuario es fundamental en la producción de alimentos, pero requiere de impulso y soluciones estructurales para enfrentar las presiones inflacionarias y el riesgo de desabastecimiento. De lo contrario, en lugar que el país se beneficie con mayor producción y empleo, se estaría favoreciendo la importación y contrabando de alimentos.

Asimismo, considerando que el 32% de la población trabaja en el sector agropecuario (Dossier UDAPE, dato para el 2009) y, en el caso del área rural, el 76% de la población se dedica a esta actividad; es fundamental considerar al mismo para analizar el tema del empleo, además de tener en cuenta que la mayoría de la población del área rural es pobre.

La agricultura, ganadería, caza y pesca, así como los proyectos de riego, son competencias del nivel central del Estado y las entidades

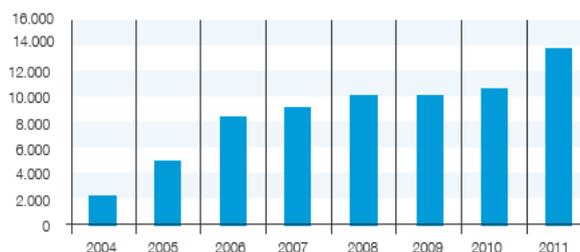
territoriales autónomas, por lo que darle el impulso necesario es tarea del mismo y, por supuesto, requiere de la participación del sector privado, para lo cual es fundamental la existencia de legislación necesaria para que éste se pueda desarrollar.

La Constitución boliviana afirma que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Con relación al gasto e inversión, establece que las asignaciones atenderán especialmente a la alimentación, para lo cual es necesario aumentar la producción, lo que a su vez requiere de políticas públicas efectivas que apunten a este objetivo.

El país todavía, cuenta con importantes recursos, incluso con saldos en cuentas bancarias de presupuestos sin ejecutar, con los cuales puede impulsar la producción en sectores como el agropecuario a través de la inversión y así frenar o revertir la disminución de la participación agropecuaria en el PIB nacional.

Finalmente, el Plan de Desarrollo del actual gobierno plantea transformar la matriz y patrón de desarrollo orientando los excedentes económicos de sectores estratégicos como hidrocarburos hacia áreas generadoras de ingresos y empleo. En tanto no se asignen mayores recursos a las inversiones en sectores productivos como el agropecuario no se cumplirán estos planteamientos.

Evolución Renta por Hidrocarburos (IDH y Regalías)
(En millones de Bs)



	Ejecución de Ingresos								Presupuesto
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Regalía hidrocarburrifera (18% del valor de la producción)									
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) (32% del valor de la producción)	2.285	2.659	3.110	3.277	3.558	3.644	3.830	4.724	3.900
TOTAL (50% del valor de la producción)		2.321	5.497	6.954	6.844	6.465	6.744	8.996	6.934

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de: 2004 - 2007 UPF, 2008 - 2011 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y 2012 Presupuesto General del Estado.

Derecho a producir¹

Arantxa Guereña Tomás

Ingeniera agrónoma y especialista en ambiente y desarrollo.

La agricultura ya no es la base de las economías suramericanas pero sigue siendo estratégica en el empleo, la balanza comercial, el crecimiento económico, equilibrio territorial y seguridad alimentaria. Los gobiernos de la región deben revisar su sesgo hacia la agroexportación, su miopía de género, garantizar el equilibrio en el acceso a la tierra y el agua y situar la pequeña agricultura en el centro de las políticas agrarias y de inversión pública. Esta sería una vía para reducir la pobreza y la desigualdad.

Con ese breve pero contundente resumen, Arantxa Guereña inicia la presentación del texto cuyo contenido se resume en la presente versión 77 de la serie Diálogos. La base del documento de Guereña fueron seis estudios nacionales (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú) encargados por Oxfam, en el marco de su campaña CRECE.

Tras la crisis por la escalada en el precio de los alimentos en 2007/08 –que por primera vez hizo que la cifra de personas que sufren hambre superase los mil millones– la inversión en agricultura volvió al primer plano de las preocupaciones de los gobiernos, las agencias internacionales de desarrollo y los organismos financieros internacionales.

Durante los dos años siguientes se comprometieron recursos para impulsar la producción y disponibilidad de alimentos. Sin embargo, la crisis económica y el afán por reducir el déficit público están imponiendo drásticos recortes en los presupuestos nacionales y de la ayuda al desarrollo, en 2009, la ayuda oficial al desarrollo global descendió en términos reales, por primera vez en muchos años.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Alimentación (FAO) calcula que la inversión pública global en el sector agrícola debería crecer en torno al 50%, desde los actuales 142.000 hasta 209.000 millones de dólares anuales. Esto incluye las inversiones que se necesitan para estimular la producción agrícola, así como los servicios de almacenamiento y procesamiento para reducir las grandes pérdidas post-cosecha (éstos últimos, de acuerdo con el organismo, deberían proceder mayoritariamente de fuentes privadas). Sin embargo esta cifra no contempla la inversión pública necesaria para ampliar las redes de caminos rurales ni la infraestructura de riego y electrificación rural, y tampoco otros servicios básicos para el desarrollo rural como la salud y la educación.

La agricultura en la región

La mayoría de los países de América del Sur pertenecen a la categoría de países urbanizados. De los seis analizados en este informe, sólo Paraguay (con más de un 40% de población rural y un 26% de participación de la

agricultura en el PIB) se considera de base agrícola según la clasificación del Banco Mundial. A pesar de ello, en todos los casos la agricultura sigue siendo un sector estratégico en la generación de empleo, la balanza comercial, la seguridad alimentaria, el equilibrio territorial y el crecimiento económico de las áreas menos industrializadas.

Con excepción de Brasil y Colombia, la mayoría de las personas pobres en la región dependen de la agricultura para subsistir. En Perú, por ejemplo, según el estudio nacional realizado, más del 60% de los hogares bajo la línea de pobreza viven de la agricultura, proporción que se eleva al 80% en el caso de los hogares en la pobreza extrema. Por otro lado, la agricultura ha contribuido en la región a amortiguar los impactos de la crisis económica mundial, evitando que las tasas de crecimiento de la economía se retraigan aún más.

A medida que han ido creciendo otros sectores de la economía, la agricultura ha perdido peso relativo en el producto interno bruto (PIB). De representar entre el 20 y el 30% del PIB en 1960 pasó a menos del 10% en 2008 en cuatro de los seis países estudiados. Las dos excepciones a esta tendencia decreciente son Ecuador, con un aumento casi constante de la participación agrícola en el PIB desde 1980 (y un ligero descenso desde 2003) así como Paraguay a partir de 2001. En el caso de Ecuador, hay que señalar que este incremento responde a un fuerte impulso a la producción de banana, cacao y otros cultivos de gran escala.

¹ El contenido de esta nota fue extraído textualmente del documento "Derecho a producir: Invertir más y mejor en la pequeña agricultura de América del Sur", elaborado por Arantxa Guereña a solicitud de Oxfam, en el marco de su campaña CRECE. Octubre de 2011. Para acceder al documento completo ir a http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=45&nc=&next_p=2&cod=198 o http://www.boliviarrural.org/crece/public/uploads/articulos/derechoaproducir_oxfamcrece-04102011.pdf

Algunos estudios, sin embargo, defienden que el tamaño del sector agropecuario es mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales, pues éstas sólo valoran el aporte de la producción primaria. Si se tuviesen en cuenta los fuertes vínculos con los sectores de insumos agrícolas y de elaboración y distribución de alimentos, el impacto de la agricultura sobre la economía sería mucho mayor que el que expresan las cifras oficiales. Por otro lado, la forma habitual de medir el valor agregado excluye una parte muy importante del sector, al no contabilizar la agricultura de subsistencia ni todas las transacciones no comerciales o en el mercado informal.

Gracias a su abundancia en recursos naturales y a unas políticas enfocadas hacia la exportación, casi todos los países estudiados son exportadores netos de productos agropecuarios. Por el contrario, en varios de ellos resulta deficitaria la producción de alimentos básicos (cereales, en particular). Es el caso de Perú, Ecuador y Colombia, países altamente dependientes de las importaciones de alimentos, los cuales tienen precios cada vez más altos y volátiles en el mercado internacional. Esto los sitúa en una posición muy vulnerable en términos de seguridad alimentaria. Por ejemplo, en Colombia, casi tres cuartas partes de las importaciones agropecuarias son cereales, cuyos precios han sufrido las mayores oscilaciones en los últimos tres años. Por el contrario, otros países como Brasil, y Paraguay dependen en menor medida de las importaciones para satisfacer su demanda interna de alimentos básicos. Aunque finalmente, la capacidad de los países para hacer frente a las importaciones de alimentos dependerá, entre otras variables, del ingreso disponible en cada período y de los superávits fiscales que les permitan, entre otras cosas, realizar importaciones de emergencia o financiar programas de compensación.

Las brechas principales

Probablemente la mayor contribución del sector agropecuario se manifiesta en el empleo. Se trata de una actividad intensiva en mano de obra, lo que resulta evidente al comparar las tasas de empleo con la participación en el PIB nacional. La ocupación en esta actividad supone hasta un 40% en el caso de Bolivia –incluyendo tanto el empleo por cuenta ajena como por cuenta propia– donde el sector no llega al 13,5% del PIB. Lamentablemente, el empleo por cuenta ajena suele ser informal y mal remunerado. En Colombia, por ejemplo, en 2004 sólo el 4,5% de los trabajadores agrícolas asalariados contaban con un contrato de trabajo y estaban afiliados al régimen contributivo de salud.

La inequidad en el acceso a la tierra ha demostrado ser uno de los problemas más difíciles de resolver. En Brasil, por ejemplo, a pesar de haberse puesto en marcha el mayor programa de reforma agraria en toda América Latina, la falta de equidad en la distribución de la tierra se ha profundizado. En 1970 las explotaciones de más de mil hectáreas ocupaban menos del 40% de la superficie agrícola, mientras que en 2006 (el censo más reciente disponible) ocupan casi la mitad de la tierra disponible (y están en manos de sólo el 1% de los propietarios). Según el mismo censo, de los 5 millones de explotaciones agropecuarias que hay en el país, 4,3 millones se clasifican como agricultura familiar. Sin embargo, todas juntas no ocupan más que el 30% de la superficie agrícola total, lo que muestra el alto grado de concentración de la tierra en el país.

En Perú también se está concentrando la propiedad, sobre todo en los valles costeros – donde apenas unas decenas de grandes grupos empresariales explotan fincas de más de 6.000 hectáreas en promedio - y en algunas áreas de la selva. Los cultivos que más se han extendido son el espárrago y la caña de azúcar para elaboración de etanol, ambos orientados hacia la exportación.

La tierra también está mal repartida en Ecuador, donde casi la mitad de los productores posee sólo el 2% de la superficie agrícola. Así como en Colombia, donde el 85% de los propietarios poseen fincas de menos de 20 hectáreas que ocupan en su totalidad menos del 19% del área cultivada. En este país, la población desplazada por el conflicto armado – más de tres millones de personas según las últimas estimaciones – ha perdido sus tierras y sus medios de vida, lo que se ha visto agravado con la promulgación de leyes que legitiman el despojo de la tierra.

Un caso extremo es Paraguay, donde según el último censo agropecuario (de 2008) las fincas inferiores a 20 hectáreas representan el 83,5% de las explotaciones, y sin embargo ocupan sólo el 4,3% de la tierra de cultivo. Dicho de otro modo, las fincas mayores de 20 hectáreas (que corresponden al 16,5% de las explotaciones) acaparan el 95,7% de la tierra agrícola. Una gran parte de la superficie en producción está ocupada por fincas ganaderas, mientras que el área dedicada a cultivos temporales – de los que depende principalmente la pequeña agricultura – apenas llega al 20%.

Las mujeres siguen siendo sistemáticamente discriminadas en el acceso a la tierra y el agua, a la tecnología y asistencia técnica, el

crédito y los mercados. No suelen ser propietarias de la tierra que trabajan, en parte debido a normas consuetudinarias que les impiden heredarla. Se observa además que, cuanto mayor es el tamaño de las fincas, menor el acceso a su propiedad. En Ecuador, el 32% de las fincas de menos de 5 hectáreas pertenece a mujeres, frente a sólo el 9% de las fincas de más de 50 hectáreas. Y en Brasil, mientras que el 14% de las explotaciones de pequeña agricultura están dirigidas por mujeres, la proporción desciende a la mitad (7%) cuando se trata de la agricultura comercial.

Al no ser propietarias de la tierra, la mayoría de las mujeres están excluidas de los programas de crédito, de tal forma que sólo pueden acceder a éste a través de los sistemas informales, que exigen el pago de intereses desorbitados, o de los programas de microcrédito que gestionan muchas ONG, en los cuales sí suelen existir líneas específicas para mujeres. Menos del 5% de las mujeres productoras recibieron crédito en Ecuador, frente al 8% de los hombres; además recibieron un monto inferior, pues el 85% de los fondos fueron a manos de los hombres. En Colombia, de todo el crédito concedido para actividades agropecuarias entre 2006 y 2009, apenas el 3,6% se entregó a mujeres.

La escasa visibilidad de su papel social y económico y la división sexual del trabajo suelen mantener a las mujeres excluidas de los espacios de poder. Al no participar activamente como actores políticos, difícilmente hacen escuchar su voz. Y de esta forma las políticas públicas y los programas de impulso al sector agropecuario que se ponen en marcha rara vez incorporan de forma adecuada la visión y las necesidades de las mujeres.

¿Y el papel de los Estados?

Los estudios nacionales encargados por Oxfam en seis países de América del Sur permiten observar cómo ha evolucionado el gasto en los últimos años. Aunque con marcadas diferencias entre países y a excepción de Paraguay y Bolivia (donde se ha mantenido en torno al 10% durante la última década, si bien esta cifra incluye los sectores forestal, la caza y la pesca), el gasto agropecuario ha ido decayendo durante las últimas tres décadas, hasta situarse entre el 1% y el 3% del gasto total. Una proporción muy por debajo del peso relativo del sector, que está entre el 6,5% y el 26%.

Incluso en países con fuerte crecimiento económico y un importante peso de la agricultura, el presupuesto agrícola no ha cesado de descender. En Brasil, por ejemplo, entre 1995 y 2008 el gasto público aumentó a un ritmo cercano al 4% anual, y sin embargo el gasto agrícola se recortó un 3% en promedio cada año. En ese período, el gasto agrario per cápita rural cayó desde 700 a 450 reales brasileños

Probablemente más importante aún que el volumen del gasto resulta su orientación: qué prioridades se establecen en la asignación de los recursos, en respuesta a qué tipo de necesidades, y a quién favorece finalmente la inversión. Hasta el momento, las principales tendencias marcan mayor inversión en emprendimientos agroexportadores en Perú y Colombia, principalmente.

Entre las buenas noticias está el proceso de políticas públicas orientadas hacia la agricultura familiar en Brasil, lo que supuso una definición conceptual y jurídica de ésta; la propuesta de orientar una política agraria para “el buen vivir” en Ecuador y el interés del gobierno boliviano por mantener y aumentar inversiones en el rubro de la producción campesina. El principal problema es que hasta ahora se trata de planes, más que de proyectos en curso. Otros problemas en la región son: rezago en la investigación, miopía de género, baja ejecución presupuestaria y ausencia de políticas específicas para enfrentar el cambio climático.

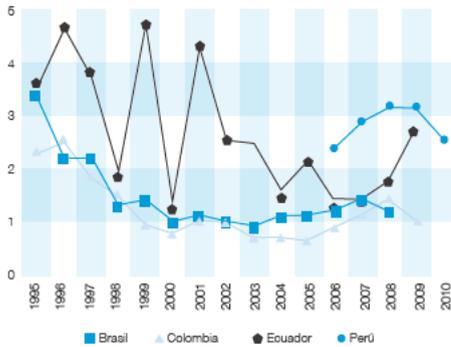
¿Por qué invertir en la pequeña agricultura?

Según los cálculos realizados para el informe mundial sobre Agricultura para el Desarrollo, del Banco Mundial, el crecimiento en la agricultura resulta entre dos y tres veces más eficaz en la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros sectores. Aunque la evidencia demuestra que cualquier tipo de crecimiento no sirve para alcanzar estos objetivos. El desarrollo agrícola sólo contribuye a reducir la pobreza si permite a las personas más pobres aumentar sus ingresos y bienestar, bien de forma directa generando empleos de calidad y oportunidades comerciales, o de forma indirecta mediante la redistribución de la riqueza y la inversión en servicios para la población.

En Sudamérica, ocho de cada diez explotaciones agropecuarias pertenecen a la pequeña agricultura. Ésta, según la Oficina Regional de la FAO, aporta entre el 30% y el 40% del PIB agrícola. Aunque su contribución más importante es al empleo, pues absorbe entre el 60% y el 70% de la población ocupada en el sector. En Brasil, por ejemplo, de

los casi 17 millones de personas que trabajan en la agricultura, más de 12 millones lo hacen en explotaciones familiares frente a menos de cinco millones en la agricultura comercial. (Ver gráfico 1).

Gráfico 1: Porcentaje del gasto público en el sector agropecuario entre 1995 y 2009



Fuente: Estudios nacionales encargados por OXFAM

Un importante argumento para invertir en la pequeña agricultura es la seguridad alimentaria. La mayoría de las personas que sufren hambre

son productores y trabajadores agrícolas, por lo que invertir en ellos aumenta la disponibilidad de alimentos al tiempo que contribuye a reducir la pobreza. Según la FAO, para alimentar a una población de 9.000 millones de personas en 2050 se necesita aumentar en un 70% la producción mundial de alimentos. Pero producir más no es suficiente, si los alimentos no se encuentran al alcance de quienes los necesitan. Y en esto juegan un papel esencial la producción a pequeña escala y los mercados locales de alimentos.

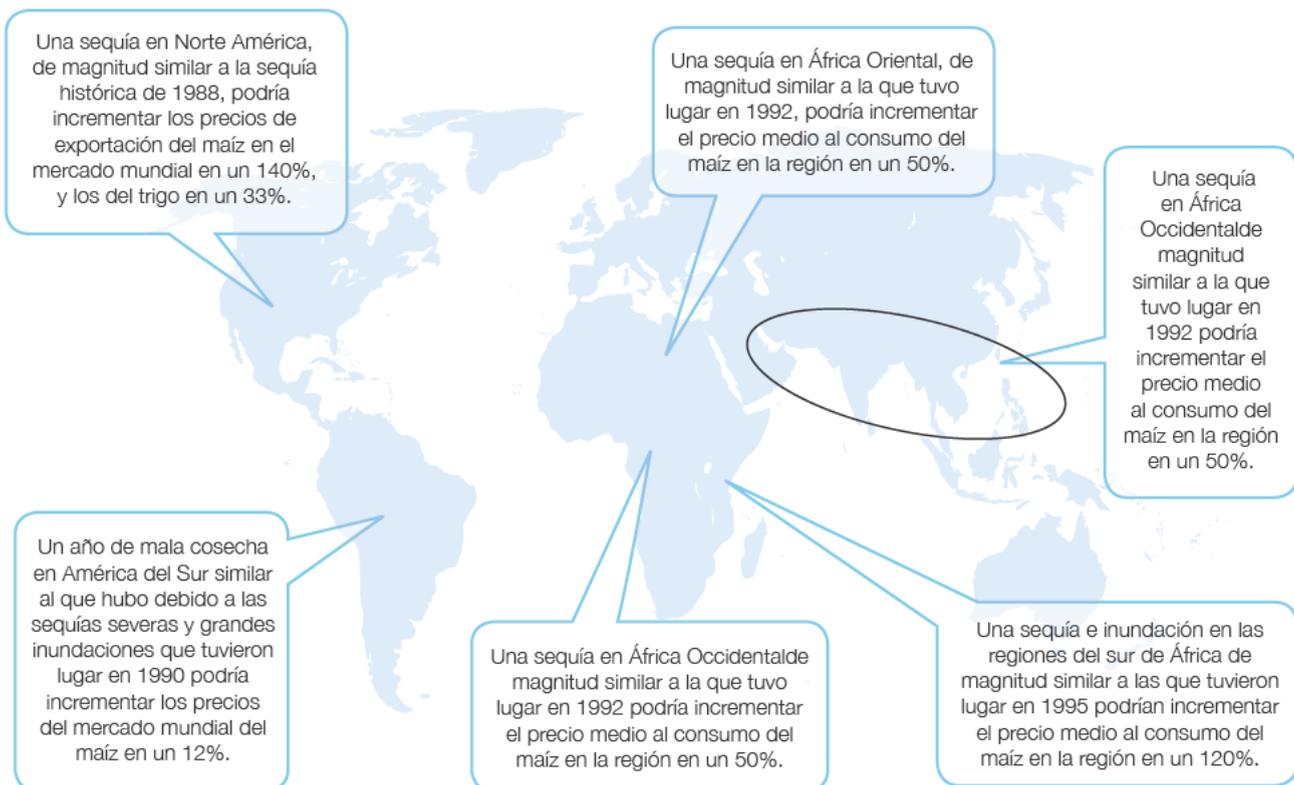
En la región, son precisamente los pequeños productores, y sobre todo las mujeres, quienes hacen llegar una parte importante de los alimentos a la mesa y a los mercados. En Brasil se calcula que el 70% del consumo nacional procede de la agricultura familiar. En Ecuador, ésta produce el 70% del maíz, el 64% de las papas y el 83% de la carne

de bovino que se consumen en el país. Y en Bolivia, casi el 40% de la demanda nacional de alimentos se cubre con la pequeña agricultura. En América del Sur, donde se calcula que casi 52 millones de personas sufren hambre tras la crisis múltiple mundial - cifras que no se veían desde 1990 - un impulso a la pequeña agricultura tendría un triple beneficio: más alimentos disponibles en los mercados locales, mayor seguridad alimentaria en los hogares y un aumento de ingresos para las personas pobres.

Una razón última - y definitiva- para impulsar la agricultura campesina es el derecho de toda persona a disponer de un medio de vida sostenible y a salir por sí misma de la pobreza.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Efectos previstos en los precios de fenómenos meteorológicos extremos basados en las hipótesis para 2030 analizadas en el estudio



Repercusiones de la volatilidad de precios en la alimentación boliviana

Maya Rivera Mazorco y Sergio Arispe Barrientos¹

Bolivia no ha podido abstraerse de los precios internacionales, y menos de las crisis alimenticias a nivel global. La relación de la volatilidad de precios, con algunos fenómenos específicos que hacen a las crisis alimentarias, como por ejemplo, la uniformización de los hábitos alimenticios, proporcionan información que enriquece el análisis del modelo productivo que se está imponiendo en el mundo: la agroindustria. Por ello es necesario realizar un resumen de lo que significan las crisis de alimentos a nivel mundial como preámbulo, para luego concentrarnos en el caso boliviano.

Crisis alimentaria en el mundo

En menos de cinco años el mundo ha sufrido dos crisis alimenticias (2008 y 2011) y actualmente, nos encontramos en la antesala de una nueva crisis. Las lecciones aprendidas, no han llegado a aplicarse porque las grandes corporaciones no tienen interés en superar las dificultades alimenticias y, por ende, el hambre en el mundo.

Las medidas que podrían formularse son: impedir la especulación sobre commodities agrícolas; desincentivar la producción de agro-combustibles; impulsar una mayor coordinación productiva que evite problemas de abastecimiento debido a fenómenos climatológicos, entre otras. La FAO ha afirmado que estamos, otra vez, cerca del umbral de mil millones de seres humanos crónicamente hambrientos. El factor preponderante de la crisis que se avecina es climático, las sequías en particular están afectando la producción en países que dominan la producción agropecuaria. Una sequía importante ya afecta el 60% del territorio de Estados Unidos, la peor desde 1956².

Existen otros factores importantes como el fomento a la conversión de commodities agrícolas en combustible. El 2008 existían mandatos en EE.UU. y Gran Bretaña para fomentar la producción de biocombustibles, lo que llevó a una especulación de precios que sigue vigente. El panorama es preocupante, el stock de maíz global se encuentra en el nivel más bajo de los últimos seis años de acuerdo al Consejo Internacional de Granos (IGC, en inglés)³, y éste puede ser rápidamente absorbido si existen futuras contingencias climáticas que impidan lograr niveles óptimos de producción. De hecho, tenemos que las aguas acumuladas en el subsuelo de la cuenca del río Misisipi en EE.UU. han bajado de manera preocupante por la sobreproducción agrícola y, por las altísimas dosis de pesticidas utilizadas en la producción agrícola de la zona, que es el seno de producción de granos más importante del mundo. Estamos ante factores que hacen insostenible la producción, los que están acompañados de la política que EE.UU. ha sostenido desde décadas para concentrar la producción y crear dependencia alimenticia, a través de subsidios que han imposibilitado la competencia con las importaciones de alimentos, especialmente en países periféricos. Estos elementos hacen que las bajas productivas en esta zona, se constituyan en desastres alimentarios para países, ahora

dependientes de la producción norteamericana.

Todos estos factores, además de otros, agudizan el problema del hambre en el mundo y aquellos que detentan el poder para frenar esta fuerte tendencia, no hacen más que defender sus intereses políticos y económicos. Por lo menos, esa es la interpretación que podemos darle a las recientes declaraciones del vicepresidente de Cargill⁴, Paul Conway, hechas en la Conferencia de Inversiones de Credit Suisse (AIC), que afirman que el mundo puede proveer de alimentos a nueve millones de personas si los gobiernos aseguran derechos propietarios sobre tierras y afianzan una producción de alimentos globalizada. A su vez, indicó que se necesitaría incrementar la producción global en un 70%, haciendo hincapié en que los mercados agrícolas deben operar de manera más abierta permitiendo mayores flujos de alimentos a través de las fronteras⁵.

Considerando que en la actualidad ya se produce suficiente para alimentar el mundo, esta apreciación es prueba de que la intención no es asegurar una adecuada nutrición de la población mundial, sino que se busca continuar con la concentración de la cadena de producción en manos de empresas para afianzar los fines de acumulación de capital y poder de las mismas. Las brechas estructurales de pobreza y hambre en el

¹ Maya Rivera Mazorco es antropóloga y socióloga. Sergio Arispe Barrientos es abogado.

² IGC. <http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf>. 20/08/2012

³ IGC. <http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf>. 20/08/2012

⁴ Cargill, la mayor empresa de comercialización de granos del mundo.

⁵ The Financialist. "Food for nine billion? Yes we can". En: <http://www.thefinancialist.com/food-for-nine-billion-yes-we-can/>. 17/08/2012

mundo continúan creciendo y no hay intención, desde estas esferas, de reducirlas.

El problema de la producción de alimentos no debe abordarse desde la capacidad del sistema de producción agrícola, ni desde el cambio climático – aunque son aspectos cruciales –, sino encararse desde la raíz: el modelo de producción que se caracteriza en, esencia por una filosofía de no unidad del ser humano con la naturaleza, en la agroindustria y su lógica de utilización y explotación de la tierra al máximo, y el monocultivo, a pesar de los problemas ambientales que de ello surgen.

Las crisis alimenticias y la importancia del mercado chino

No es casual que los hábitos alimenticios en el mundo sean cada vez más uniformes en correspondencia con la cultura de producción y consumo de alimentos occidental. Como logro esencial de esta homogeneización, tenemos el caso del mercado chino. Los nuevos hábitos de consumo de corte occidental, que se están insertando en el mercado chino, junto al avance de la agricultura industrial en este país, han generado un proceso de reacomodación del mercado de commodities agrícolas a nivel mundial. El nivel de consumo cárnico en China, así como la importación de soya para alimentos balanceados, son tan significativos que empresas comerciantes de granos como Cargill y Bunge, además de proveedores de insumos y tractores como Monsanto y John Deere, han ganado ingentes cantidades de dinero abasteciendo a este creciente mercado. A su vez, existe otro fenómeno, paralelo al anterior: la agudización de la lucha por el acaparamiento de tierras para la producción, que profundiza el problema alimenticio. Este fenómeno se da gracias a que el aprovisionamiento de enormes cantidades de forraje y granos para el mercado chino, ha incrementado la búsqueda de tierras

en las cuales producir estos commodities agrícolas a precios bajos, en África, el Sudeste Asiático y Sudamérica.

Estas medidas asumidas por el gobierno chino son contrarias a su significativa población campesina de alrededor de 800 millones de personas. La importación de forraje animal y soya producida por grandes proveedores, da impulso a la desestructuralización de la lógica de auto producción y autosuficiencia alimenticia de este país. El ingreso de commodities agrícolas altamente subsidiados imposibilita competir a su gente⁶, y lastimosamente, asegura la tendencia de descampesinización que se da en el mundo entero, que va de la mano de concentración de la producción de alimentos, creando tal dependencia que las soluciones a las crisis alimenticias están sujetas a la decisión de pocas empresas.

Bolivia en el marco de la crisis

Nuestro país no está lejos de la realidad descrita líneas arriba. Los hábitos alimenticios en Bolivia han sufrido modificaciones importantes las últimas cuatro décadas, concentrándose en el consumo de alimentos o productos derivados de la agroindustria nacional.

Al respecto, una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística Boliviana (INE) el 2004 y 2005, nos proporciona información referida a que la dieta boliviana está esencialmente compuesta por un mayor consumo cárnico, de azúcar y aceite⁷.

Por su parte, tenemos la creciente tendencia a la descampesinización en Bolivia. Indudablemente, los cambios alimenticios han modificado el requerimiento de productos en los mercados urbanos (los mayores mercados nacionales La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). La nueva dieta occidental se contrapone a la gran variedad genética alimentaria desarrollada por generaciones de campesinos, producción adecuada a la topografía, clima y disponibilidad de suelos. Cabe resaltar que los campesinos disponen de suelos cada vez menos productivos⁸.

Hacia el 2000 la agricultura campesina aportaba (como oferta de alimentos para el consumo interno) sólo el 38,8%. La agricultura empresarial y semiempresarial aportaban con el 44,6% y los importadores con el 18,6%. En la década de los setenta, se estimaba un aporte de la agricultura campesina hasta en un 75%. Estudios recientes muestran que en el año agrícola 2005-2006 la producción campesina significaba el 25% del total producido, la producción campesina en el periodo 2008-2009 representaba ya sólo el 21,6. Otros estudios actualizados sitúan a la producción campesina como proveedor de menos del 20% de los alimentos a nivel nacional⁹.

Además, si tomamos en cuenta que las unidades productivas familiares campesino/indígenas no solamente producen alimentos para el mercado, sino para su autoconsumo, la pérdida de su actividad económica les quita su herramienta para generar dinero en el mercado, y su capacidad de ser autosuficientes, engrosando la población dependiente de productos alimenticios industriales y erosionando las condiciones de seguridad y soberanía alimentaria del país¹⁰.

6 The Financialist. "Food for nine billion? Yes we can". En: <http://www.thefinancialist.com/food-for-nine-billion-yes-we-can/>. 17/08/2012

7 GRAIN. "¿Quién alimentará a China: Los agronegocios o sus propios agricultores? Las decisiones de Beijing repercuten alrededor del mundo".

8 Los datos recabados se distribuyen de la siguiente manera: 20,4% en pan y cereales; 20,2% en carne; un 12,3% en legumbres y un 25% del gasto total en consumo de alimentos fuera del hogar, tendencias que responden a procesos de urbanización (encuesta Instituto Nacional de Estadística –INE, 2004).

9 Crespo, Miguel Ángel. "El mito de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia". 6 de Julio 2010. PROBIOMA

10 Rivera, Arispe, Maya y Sergio. "¿Quién decidirá quién come y a cuánto en Bolivia? Una mirada al contexto internacional nacional". Le Monde Diplomatique, Bolivia. Mayo 2011.

Como consecuencia de esta tendencia ascendente de la agroindustria, tenemos que más del 80% de la producción está en manos de medianos y grandes productores de Santa Cruz en sociedad con la agroindustria. Tomando en consideración lo recabado por Miguel Ángel Crespo (PROBIOMA), Santa Cruz aporta con los siguientes alimentos producidos a nivel nacional: 62% del arroz; 43% del trigo; 40% del maíz; 100% de la soya (datos 2008); 30 a 32% de las hortalizas; 40% de la papa producida (que consiste en tres tipos de papa holandesa introducidas)¹¹.

En función a esta tendencia podemos indicar que con cuatro cultivos importantes (arroz, trigo, maíz y soya), Santa Cruz se convierte en el departamento más importante al hablar de seguridad alimentaria dentro de las nuevas tendencias alimenticias¹².

No menos preocupante es que casi un tercio del área cultivada de Bolivia, alrededor de tres millones de hectáreas, es producción agroindustrial preferentemente para la exportación; en las mejores tierras cultivables del país. Los suelos más productivos del país se encuentran a disposición del intercambio de commodities agrícolas al mejor postor¹³.

Finalmente, la producción de alimentos está cada vez más ligada a los vaivenes del panorama internacional. No es de extrañar entonces que los precios locales de alimentos estén influenciados por los precios internacionales, que la inversión sea en extremo reducida y que sea la agroindustria la protagonista de este escenario.

La uniformización de nuestros hábitos alimenticios

El análisis que acabamos de exponer revela que nuestro país no escapa a las tendencias de producción, distribución y consumo de alimentos dominada por cada vez menos empresas, que no tienen la intención de alimentar a la población, sino de dominarla a través del estómago, decidiendo qué se come, a qué precio, cuánto y quién come. La pérdida de nuestro campesinado y una mayor dependencia alimentaria hacia un sistema agro industrial enfocado en la exportación de commodities agrícolas hace de Bolivia un país vulnerable ante la incidencia de la volatilidad de precios a nivel global. Es hora de invertir en una agricultura enfocada a satisfacer las necesidades de la población boliviana o tendremos serios problemas para alcanzar la seguridad alimentaria en Bolivia.

La diversificación de nuestros hábitos alimenticios está íntimamente vinculada a la búsqueda de un aparato productivo nacional y soberano. Si no fortalecemos a nuestros productores que representan el 30% o más de nuestra fuerza laboral, tendremos una dependencia absoluta de alimentos subsidiados y

contraria a los intereses de una masa poblacional campesina importante.

La uniformización de la oferta alimenticia va de la mano de la uniformización de los hábitos alimenticios, y ambos devienen de los procesos de homogeneización culturales y económicos. La producción de alimentos y los procesos culturales de consumo de los mismos se corresponden con modelos culturales y económicos específicos. A nuestro modo de ver, tenemos un modelo que propone la unidad del ser con la naturaleza y que incurre en procesos de producción y consumo complementarios con los ciclos, periodos y características de la tierra, con el fin de mantener el equilibrio ambiental. Este modelo mantiene la diversidad de alimentos, así como los hábitos alimenticios. A este modelo corresponde la agricultura tradicional y campesina.

La pérdida de diversidad de técnicas productivas, así como de la riqueza genética de nuestros productos agrícolas, que son necesariamente un patrimonio nacional intangible, como consecuencia del proceso de uniformización que acabamos de describir, es preocupante. Una producción diversificada aporta con oligoelementos importantísimos para la nutrición y desenvolvimiento de la población. Lastimosamente, como hemos visto en este ensayo, el proceso que se vive en nuestro país es precisamente el que se está dando a nivel internacional: la uniformización de los modelos de producción, junto a la homogeneización de los hábitos alimenticios, que nos hacen dependientes y nos sujetan a las subidas de precios internacionales.

¹¹ Datos proporcionados por Miguel Ángel Crespo en Marzo de 2011.

¹² Crespo, Miguel Ángel, Op. Cit.

¹³ Según datos del INE, Bolivia no se caracteriza por tener grandes extensiones de tierras aptas para la agricultura. Los suelos arables tipo I y II, sin restricciones, ascienden a 16,840 km² (1.5% del total de la superficie del país), y los suelos con restricciones tipo III y IV abarcan 286,780 km² (26,1% de la superficie total) y mayoritariamente se encuentran en el departamento de Santa Cruz.

Desarrollo rural en perspectiva sudamericana

Oscar Bazoberry Chali¹

En los enfoques y prácticas de desarrollo rural predominan la visión y la acción local y existe un imaginario que sobredimensiona los efectos de las políticas públicas estatales, capaces, de generar condiciones para que los distintos sujetos del campo participen de la vida económica y social de sus entornos inmediatos y en sus países. Si bien es cierto que hay una relación directa entre el carácter de los Estados y la acción de los gobiernos en las realidades agrarias particulares de cada país, también es verdad que existen condiciones regionales que influyen en cada uno de los Estados.

Algunos antecedentes

Bolivia está viviendo una coyuntura particular, en la que las demandas campesinas e indígenas esperan ser atendidas por un gobierno que ha sido favorecido por el voto de la población rural. Es difícil pensar en un momento más favorable que el presente, aunque las visiones más optimistas nos dirán que se trata de un proceso con avances sustanciales y las menos, que se ha perdido una gran oportunidad.

Queremos llamar la atención sobre la perspectiva regional del desarrollo rural, convencidos de que es una dimensión imprescindible para generar las condiciones de viabilidad y sostenibilidad del entramado entre la producción, el consumo, el poder de los productores y la soberanía de los Estados.

Las demandas que los campesinos e indígenas tienen serán factibles en la medida en que se universalicen.

Sin embargo, existen muchas fuerzas contrarias, de quienes promueven la acumulación de tierra y el dominio del mercado financiero sobre los bienes y las capacidades productivas rurales, desde alimentos hasta servicios ambientales. Por tanto, mirar el contexto, y, principalmente, las vecindades, es importante.

Por otro lado, es necesario observar la verdadera capacidad de los gobiernos nacionales para establecer políticas favorables al desarrollo rural que privilegien el bienestar de las poblaciones locales y la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Contexto sudamericano para el desarrollo rural

Es evidente que la dimensión territorial de Sudamérica y sus condiciones agroecológicas y biogeográficas (bosques, tierras agrícolas, aguas), nos permiten referirnos a una unidad que adquiere mayor sentido de homogeneidad que otras regiones más grandes, por ejemplo América Latina, o lo que es muy común América Latina y el Caribe. Estas últimas tienen, sin duda, una mayor connotación de identidades sociales, tradición colonial, pero no la correspondencia de las características y dimensiones entre la tierra y sus recursos naturales, elemento sustancial del desarrollo rural y las políticas públicas que nos permite una aproximación sudamericana.



Foto: Oxfam

¹ Sociólogo, coordinador de la Maestría en Desarrollo Rural Sostenible en el CIDES – UMSA y director del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS). Artículo resumido del ensayo publicado en la revista Umbrales.

Una constatación de la especificidad de Sudamérica respecto a otras regiones en el continente es la creciente importancia que ha adquirido tras la crisis energética y alimenticia que golpeó a la economía mundial durante la última década.

Agencias y organismos multilaterales de cooperación han volcado la mirada hacia la región, justamente por sus particulares condiciones agroecológicas, por la gran extensión de sus tierras y la diversidad de sus territorios. Se han multiplicado las inversiones en la explotación de sus recursos naturales. Sudamérica juega, por tanto, un rol importante y activo en dos sectores estratégicos de la economía mundial y del bienestar de la población: la energía (ISBELL, 2008) y los alimentos.

Si bien los países de Sudamérica, muestran diferencias importantes entre sí, también tienen similitudes que nos permiten hablar de una unidad regional. Llegamos a finales de la primera década del siglo XXI con Sudamérica como una región en la que se puede considerar que el 30% de su población vive y desarrolla sus actividades principales en el área rural; muchos poseen tierra y recursos propios, en cambio otros, son trabajadores asalariados rurales (aunque la connotación de asalariado no es propiamente la misma que un obrero del área urbana o industrial).

Hay quienes viven en comunidades, principalmente indígenas, de propiedad colectiva de la tierra y quienes viven en comunidades con subdivisión de tierras y titulaciones familiares; hay originarios, migrantes e indígenas en zonas ajenas y hay también extranjeros, criollos, afro descendientes y mestizos, con distintos grados de instrucción.

Hay gente que conserva los conocimientos ancestrales locales y maneja de manera sostenible su medio y hay otra que los desconoce y realiza prácticas agresivas con el medio ambiente y sus propias fuentes de recursos.

Se calcula que aproximadamente el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) proviene del campo, sin embargo, en la mayoría de los países no se han realizado ejercicios para calcular cuánto del PIB es generado a partir de materias primas agropecuarias que, por tanto, se podrían vincular más al campo que a los procesos industriales.

Los datos expuestos en la Tabla 1 muestran grandes diferencias entre países, tanto en el PIB por habitante como en la composición del Valor Agregado Agrícola (VAA) a sus economías. Se pueden diferenciar dos grupos: los que pasan del 10% y aquellos de aporte inferior. Sin embargo, es llamativo el caso de Argentina, que reporta una contribución muy baja de la agricultura, siendo un país conocido por el crecimiento de su sector sojero y los conflictos internos que esto generó en su política nacional. Otros casos que hay que tener presente son los de Ecuador, Paraguay, Perú, Chile, Venezuela y Bolivia, donde se mantiene o crece el aporte al PIB, considerando que los años comparados han reportado también un crecimiento de sus economías.

Tabla 1: Países de Sudamérica, PIB y VAA

	PIB por habitante, dólares constantes de 2000		VAA como proporción del PIB en porcentajes	
	2000/05	2009	2000/05	2009
Argentina	7.328	9.870	4,6	3,9
Bolivia	1.025	1.192	13,3	13,6
Brasil	3.794	4.416	4,6	5,7
Chile	5.221	6.106	5,0	6,0
Colombia	2.469	3.087	9,4	7,8
Ecuador	1.427	1.770	9,7	11,8
Guyana	795	1.798	32,2	31,2
Paraguay	1.332	1.437	17,0	20,2
Perú	2.155	2.916	6,9	7,4
Surinam	1.793	2.167	11,7	9,6
Uruguay	5.990	8.238	6,6	6,5
Venezuela	4.589	5.493	3,6	3,8

Fuente: Elaborado en base a datos de CEPAL - FAO - IICA (a su vez tomado de CEPAL base de datos BADECON).

La incidencia de la desnutrición² y la intensidad de la carencia de alimentos², uno de los indicadores más duros de seguridad alimentaria y, por extensión, de la soberanía alimentaria, tiene datos diferentes en los países, por ejemplo, los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el 2006, que son los últimos agregados que conocemos, muestran la situación que se expresa en el siguiente cuadro.

² Intensidad de la carencia de alimentos es la escasez promedio, en kilocalorías, que sufren las personas desnutridas, expresada como porcentaje del requerimiento mínimo diario de ingesta de energía en la dieta. Mientras menor sea el valor, menos intensa será la carencia de alimentos (PNUD, 2010).

Tabla 2: Sudamérica, incidencia de la desnutrición e intensidad de la carencia de alimentos

Países sudamericanos	Clasificación según el Índice de Desarrollo Humano	LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE VIVIR SIN MISERIA			
		Incidencia de la desnutrición		Intensidad de la carencia de alimentos	
		(% del total de la población)		(Insuficiencia porcentual promedio en las necesidades mínimas de energía alimentaria)	
		1990-1992	2004-2006	1990-1992	2004-2006
Argentina	ALTO (46)	<5	<5	7	11
Bolivia	MEDIO (95)	24	23	13	15
Brasil	ALTO (73)	10	6	13	12
Chile	ALTO (45)	7	<5	9	11
Colombia	ALTO (79)	15	10	13	9
Ecuador	ALTO (77)	24	13	12	5
Guyana	MEDIO (104)	18	6	12	13
Paraguay	MEDIO (96)	16	12	12	12
Perú	ALTO (63)	28	13	14	14
Surinam	MEDIO (94)	11	7	10	10
Uruguay	ALTO (52)	5	<5	8	0
Venezuela	ALTO (75)	10	12	10	10

Fuente: Elaborado en base al Índice de Desarrollo Humano 2010, PNUD.

Como podemos apreciar, existen situaciones muy diversas. Hay países como Chile y Uruguay, que tienen índices menores al 5% de su población, lo que es considerado un nivel óptimo, mientras, en el otro extremo, está Bolivia, que mantiene un índice elevado de 23% al 2006. En el medio hay una gama variada de indicadores. En la progresión se puede apreciar que en cuanto a la desnutrición la tendencia es a la baja, no así en cuanto a la insuficiencia porcentual promedio en las necesidades mínimas de energía alimentaria, un indicador de que la brecha de pobreza se está incrementando.

Producción y comercialización de alimentos

Sudamérica es una región con enorme diversidad en la producción de alimentos, tanto en especies locales como introducidas. Solemos sobrestimar esa diversidad,

calificándola como la mayor del mundo, generalmente por desconocer la realidad de otras regiones. Lo cierto es que toda región del mundo es portadora de diversidad, alguna más que otras, pero los grados de calificación son subjetivos y generalmente están relacionados con una u otra disciplina pero, desde un enfoque multidisciplinario, competir regionalmente por mayor diversidad eco sistémica no tiene sentido.

La anterior afirmación no significa negar que, siglos atrás y hoy mismo, el origen de muchas especies, que hoy son imprescindibles para la humanidad, se encuentran en la región sudamericana. Posiblemente, el ejemplo más claro y universal sea la papa de los Andes. Actualmente la situación es más compleja y los principales cultivos y productos de consumo masivo, como aquellos que son considerados commodities, han atravesado fronteras y son cultivados en gran parte del mundo y de ellos depende, deberíamos decir

en muchos casos, la alimentación de gran parte de la humanidad.

En Bolivia sobresale la castaña, que le da al país una posición de cuarto lugar en el mundo, seguida por la soya con un octavo. Evidentemente, la quinua no se encuentra contabilizada. Hay que resaltar la gran diversidad de productos y la diferente contribución de cada uno de los países, con lo que podemos confirmar el criterio de complementariedad que perfectamente puede primar en las relaciones comerciales entre los países de la región.

No hay que perder de vista que, si bien la producción de alimentos aún se encuentra en su fase expansiva, la estructura interna de producción va variando con el tiempo. Tampoco se debe descuidar la participación de los recursos forestales, tomando en cuenta la gran expansión de los cultivos para pulpa, que se vienen dando en algunos países como Uruguay y Brasil.

A partir del año 2008, tras la crisis alimentaria, se atenuó la velocidad del cambio de uso de la tierra o se está compensando con la ampliación en nuevas zonas. La tendencia está generando mayor demanda sobre los recursos suelo y agua en Sudamérica.

En la Tabla 3 podemos inferir el balance entre producción y consumo de los países de Sudamérica. Aquí se contabiliza todo lo que circula y se consume en la región. Incluimos en nuestros datos, no solamente los productos agroindustriales de

mayor producción y consumo, sino también algunos que tienen una base campesina importante, como la yuca, cuya importancia para la economía familiar es sobresaliente en muchos ecosistemas y sistemas alimenticios, pero que, sin embargo, como podemos ver en los reportes de circulación de productos sus datos son igual a cero.

En la soya y sus derivados, la región es exportadora neta. Lo mismo ocurre con el maíz, azúcar y la carne. Productos como la quinua, todavía gozan de una cierta exclusividad

de la región andina. En cambio, Sudamérica es importadora neta de productos como el trigo, papa, chuño (papa congelada) y ajo. El trigo es un producto altamente sensible para los bolsillos de la población en general, posiblemente, junto con la carne de pollo, sea el producto de mayor crecimiento en consumo en todos los países, especialmente porque es consumido en forma de pan y fideos, ambos de gran demanda en el conjunto de la población- Por ello, sus fluctuaciones generan mayores dificultades a los bolsillos de los más pobres.

Tabla 3: Exportación e importación de productos agropecuarios, datos 2009

Exportaciones			Importaciones		
Producto	Cantidad (Ton)	Valor (1.000 US\$)	Producto	Cantidad (Ton)	Valor (1.000 US\$)
Soya	36.211.592	14.418.082	Trigo	10.811.571	2.644.847
Soya torta	35.850.564	13.343.668	Maíz	8.178.678	1.746.743
Azúcar total	27.200.985	9.316.998	Soya torta	3.530.363	1.561.972
Maíz	18.361.244	3.381.006	Soya	1.471.747	616.262
Carne total	7.912.065	16.328.853	Azúcar total	1.305.193	540.698
Trigo	7.448.714	1.499.054	Arroz	1.007.303	489.048
Soya aceite	6.516.679	4.903.497	Trigo harina	980.391	324.470
Carne pollo	3.569.970	5.258.265	Soya Aceite	862.864	742.622
Arroz	2.606.372	1.212.033	Carne total	606.553	1.788.804
Naranjas jugo	1.496.972	915.700	Papa congelada	234.886	208.679
Trigo harina	1.014.668	321.385	Ajo	212.712	148.510
Naranjas	304.423	148.137	Carne pollo	119.598	179.562
Plátanos	239.739	115.926	Papa	89.295	31.735
Cacao en grano	137.480	370.821	Cacao en grano	80.315	195.142
Papa congelada	121.901	108.120	Plátanos	60.519	4.646
Ajo	99.649	123.119	Carne vacuno	59.808	295.251
Carne vacuno	81.754	358.729	Naranjas	55.571	9.651
Papa	46.200	20.869	Naranjas jugo	10.367	16.880
Cacao pasta	14.903	58.257	Cacao pasta	8.620	35.534
Quinua	10.344	23.439	Yuca harina	56	31
Yuca harina	2.423	4.878	Quinua	0	0
Yuca	0	0	Yuca	0	0

Fuente: Elaborado en base a FAOSTAT, consulta junio 2012.

Cuando se observa la estructura interna de las exportaciones e importaciones, resulta muy claro que hay ciertos productos que, por sus características productivas, se concentran en alguna de los países de Sudamérica; el caso más nítido es el del trigo, con el que Argentina tiene un predominio sobre los otros países.

Sin embargo, en otro tipo de productos, como la papa, el ajo y probablemente muchos otros que no están citados ni estudiados en nuestras tablas, es posible pensar en un sistema de previsión y provisión regional que favorezca a los productores de mediana y pequeña producción, con mercados razonablemente articulados localmente. Para que ello ocurra, es necesario bajar la mirada hacia la diversidad de productos que ofrece el campo, y llamar la atención de los consumidores para que mantengan una cocina diversa.

Los bloques regionales y las políticas nacionales

Contrariamente a lo que podría pensarse si el análisis de las políticas de integración y comercio entre países y bloques dependiera solamente de la importancia de la producción agropecuaria en el PIB, que, como vimos, representa alrededor del 10% en el mundo, la producción y el comercio de alimentos sería un aspecto sustancial de la política internacional.

En Sudamérica ya tiene larga data la importancia de los acuerdos comerciales entre bloques de países para el desarrollo de ciertos cultivos, grupos empresariales, inversiones y sistemas financieros. El ejemplo más cercano es el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que favoreció la exportación de soya y derivados de soya boliviana, lo que, en gran medida, facilitó el desarrollo del complejo sojero del departamento de Santa Cruz.

En orden de importancia, sin duda es MERCOSUR la instancia que ha trabajado de manera más sistemática los acuerdos comerciales, la colaboración técnica y científica e, incluso, la participación y fortalecimiento de los sectores privados y de pequeños productores afines a la visión productiva y comercial del bloque. De manera paralela al fomento de la agroindustria, la expansión de la frontera agrícola y el mercado de exportación, se han generado programas y proyectos para el apoyo de lo que se ha denominado agricultura familiar, concepto que abarca a los pequeños y medianos agricultores dispuestos a participar en el mercado.

En este breve registro es necesario hacer referencia a una organización particular: la Vía Campesina, que representa a muchas organizaciones y tiene alcance regional como parte de una confederación mayor a nivel mundial. Como otras organizaciones de campesinos e indígenas, la Vía ha fortalecido sus capacidades para articular las problemáticas particulares de cada grupo y país con una perspectiva continental y mundial.

Hay organizaciones de mucha influencia en las políticas de desarrollo rural en la región como el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Este somero recuento de la institucionalidad regional nos permite mostrar la complejidad de la relación Estado, región y mundo. Sin embargo, a pesar de la antigüedad de estas organizaciones y su trayectoria, vemos que las relaciones entre países son muy dinámicas y, muchas veces, su intensidad, contradicciones e incluso conflictos, ponen en duda su propia efectividad.

Algunas situaciones ilustran la dificultad de enlazar una problemática nacional con lo regional, tal es el caso del cacao. A pesar de que muchos países sudamericanos tienen una importante y diversa producción del producto,

su balanza de cacao – chocolate es negativa. Por ejemplo, Bolivia exporta cacao a Europa y Estados Unidos, y muchas veces sus productores de chocolate tienen que importar cacao de otras regiones de Sudamérica, incluso acudiendo a intermediarios de países que no producen el grano, como Chile (Bazoberry y Salazar, 2008).

La FAO viene alertando a la comunidad internacional que, desde la crisis de los precios de alimentos del 2008, no se han recuperado ni se recuperarán los precios anteriores, es más, luego de una baja, muestran una tendencia al incremento y mayor estacionalidad, debido a que disminuyeron las reservas mundiales de los principales alimentos de consumo humano, por lo que la dependencia de las futuras cosechas es mayor que en el pasado. A nivel mundial, las facturas por importaciones de alimentos subieron el año 2010 en un 11% y 20% en los países de bajos ingresos y déficit de producción (FAO, 2010).

Con estos ejemplos intentamos mostrar los problemas que enfrentan los países, sus iniciativas y políticas y también las debilidades de las políticas de integración. Se muestra, también, la escasa efectividad de los organismos multilaterales en tanto sistemas de gestión de la producción y del abastecimiento establecido a partir de metas regionales, que no se limiten a reflejar lo que ocurre como resultado de las acciones gubernamentales o por ausencia de ellas.

La posibilidad de una mirada regional

El IPDRS nació a partir de la premisa que, desde la perspectiva del desarrollo rural de base campesina indígena, es necesario complementar los esfuerzos, reivindicaciones y movilizaciones locales y nacionales con una perspectiva regional, que

disminuya el impacto negativo de las políticas y acciones de unos Estados sobre otros. Por ejemplo, la disminución de precios de los alimentos al costo de subvenciones y en detrimento de recursos como el suelo, bosque y agua, impiden que otros países adopten legislaciones que eviten el deterioro del medio ambiente por incrementar el costo de la producción.

Son parte de este debate las críticas a la globalización, particularmente las derivadas de la teoría de la dependencia y el crecimiento desigual, sin embargo, optamos por una noción de integración de Sudamérica como posibilidad para mejorar la situación de la población de cada uno de los países, articulando políticas internas y presentándose al mundo como una unidad de intereses.

La globalización, no como ideología, sino como la posibilidad de favorecer el crecimiento equilibrado de los países, disminuyendo las inequidades internas y externas, requiere de la construcción de instituciones inteligentes y dialogantes, que favorezcan al conjunto y a cada país en particular (Stiglistz, 2009). En esta medida, la globalización no es la pérdida de las soberanías nacionales, sino más bien la capacidad de interactuar entre ellas, un aspecto que muchas veces ha sido descuidado por las instituciones multilaterales.

Es evidente que muchos de los tratados internacionales, principalmente los comerciales, que se realizan de manera dispersa entre Estados de Sudamérica y con otros del mundo, no respetan la soberanía, entendida como la capacidad de garantizar el bienestar de la población.

Si bien los bloques sub regionales en Sudamérica han sido importantes, no aprovechan adecuadamente la

amplia diversidad de la región y, por tanto, su sentido de complementariedad. Sudamérica es el territorio adecuado para sentar las bases de una perspectiva común, integrando de manera efectiva al conjunto de doce naciones soberanas, reconociendo, que los pesos específicos son distintos y, por tanto, son distintos los intereses y beneficio de la convergencia de cada uno de ellos (Bazoberry. 2012a).

El evidente incremento de intercambio comercial entre los países de la región, es otro argumento en favor de la necesidad de una mayor integración regional para abastecer los mercados internos de cada país, lo cual no debe ser visto como una amenaza, sino más bien como una fortaleza.

El IPDRS está acompañando el debate y las políticas de integración sudamericana en materia de desarrollo rural, promoviendo y proponiendo reflexiones sobre una posible agenda que podrían tomar los gobiernos sudamericanos para mejorar las condiciones de integración de los países (Bazoberry, 2012a; Ruiz, 2012). Desde esa perspectiva sostiene que, si se quiere avanzar en la mejora de las condiciones de vida de campesinos e indígenas, se debe garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria y dotar a los Estados de un entorno acorde a los principios de soberanía que promulgan.

En la misma línea, los temas que se pueden trabajar en un nuevo proceso de integración sudamericana incluyen la discusión y compatibilización de los principales criterios estadísticos del área, como la definición de población rural y urbana y la definición y el método de estudio y conteo de las identidades y poblaciones indígenas. En ese marco es fundamental establecer un sistema y una unidad de información sobre producción y comercialización de productos agropecuarios, forestales y, en general, los relacionados con la biodiversidad.

Finalmente, es necesario reorganizar los sistemas de gobierno de los organismos regionales dependientes de las Naciones Unidas, los creados por iniciativa de los gobiernos del continente y las articulaciones sub regionales para que haya una adecuada sintonía entre la voluntad política de los gobiernos con las capacidades técnicas de los organismos multilaterales.

Creemos que es posible imaginar un contexto regional como el expuesto líneas arriba. Sin embargo, no se trata de un camino llano. Es necesario superar obstáculos, algunos corresponden a la tradición de las reivindicaciones campesinas, como la que exige un mayor control de frontera; otros a los intereses de las grandes empresas que conservan los productos de mayor crecimiento en el consumo y el flujo de los mercados internacionales. Incluso hay que superar las trabas que pone una buena parte de la burocracia multilateral, que guarda para sí los niveles de competencia que podrían superar la tendencia de los países al localismo.

Hay continuas tensiones dentro del MERCOSUR y de la CAN, se trata de fricciones entre grupos de productores, entre sistemas productivos y entre concepciones sobre los modelos de desarrollo. Todo ello reitera la comprensión de que la actividad rural sigue siendo importante, y su administración es estratégica para la estabilidad de los gobiernos y la sostenibilidad de sus políticas sociales.

Los especialistas en diplomacia y los políticos de las cancillerías, con quienes pudimos compartir algunas de estas ideas, nos indican que el planteamiento es interesante, pero, para hacerlo efectivo habría que tomar en cuenta que

los temas rurales tocan un conjunto de intereses, comenzando por los recursos naturales, las demandas de las poblaciones indígenas y campesinas, los sistemas de aprovisionamiento de alimentos y el sistema financiero, entre otros.

No todos los países, aunque tengan el mismo peso formal, tienen la misma posibilidad de influir en un nuevo enfoque regional. Brasil, por ejemplo, tiene una responsabilidad sustancial, porque, concentra

prácticamente la mitad del territorio, de la población y del PIB. A esto se añade que tiene frontera con diez de los doce países de Sudamérica, solo no la tiene con Chile y Ecuador. Sin duda, el necesario protagonismo del Brasil puede ser compensado con una mejor articulación de los otros países.

Al mismo tiempo, a mucha gente de los países de la región, le interesa particularmente los avances constitucionales que ha tenido Bolivia, principalmente referidos a la tierra, territorio, derechos indígenas y campesinos.

Estamos en un contexto excepcional, lo importante es visualizar el reto y asumirlo, a partir de los intereses y fortalezas de los múltiples actores sudamericanos, en particular de quienes trabajamos en el área de desarrollo rural.

Instituciones organizadoras



El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa especializada en desarrollo rural, que complementa acciones originadas en ámbitos del Estado y sociedad civil desde una perspectiva circunscrita a Sudamérica.

www.sudamericarural.org



La Fundación Jubileo es una institución de la Iglesia Católica de Bolivia y Alemania que presta servicios a la sociedad civil boliviana, desde las dimensiones del análisis crítico y la investigación de la realidad, la formación ética, social y política.

www.jubileobolivia.org.bo



Bolivia Rural es un medio de información y comunicación electrónico especializado en desarrollo rural boliviano, como una base para convertirse, en una oferta compleja y diversificada de comunicación virtual que incluya espacios interactivos abiertos al público, de manera que la población no sólo reciba información, sino también la genera y la comparte

www.boliviarrural.org



La campaña GRECE es una iniciativa de Oxfam Internacional. Busca cambiar las políticas globales respecto a la producción, comercialización y consumo de alimentos, para que todas las personas dispongan de una alimentación adecuada en cualquier parte del planeta. Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente en 92 países, como parte de un movimiento global por el cambio con el objetivo de construir un futuro libre de la injusticia de la pobreza.

www.boliviarrural.org/crece/
www.oxfam.org/es/crece/